

Medio ambiente y conflicto social: El caso de la Albufera de Valencia

*«En realitat, sabem més coses del plàncton, dels artròpods i de les palmípedes del llac, que no pas dels homes i les dones que hi han viscut i hi viuen»**

(Joan Fuster, 1993:105)

Ernest García y Mara Cabrejas

Una visión de la sostenibilidad social debe incluir, como uno de sus objetivos, la conservación de los hábitats más valiosos desde un punto de vista ecológico. Es el caso, por ejemplo, de las zonas húmedas, debido a su papel central en el ciclo del agua y a que ofrecen sustento a importantes poblaciones faunísticas (IUCN, UNEP y WWF, 1991: 143). En ellas, algunas actividades económicas tradicionales, ejercidas de forma sostenible, son compatibles con la conservación. En cambio, los desarrollos (industrial, turístico, agrícola y otros) comportan frecuentemente fuertes alteraciones de los ecosistemas y han de ser sometidos a diferentes restricciones. Las tensiones entre desarrollo, actividades tradicionales y conservación son más numerosas y más intensas en áreas densamente pobladas, fuertemente antropizadas y económicamente expansivas, como las zonas costeras mediterráneas. Los conflictos relativos a la distribución de recursos que son objeto de usos y presiones múltiples son a veces muy intensos (OCDE, 1993:8-9). En este papel se estudian los conflictos sociales (o ecológico-sociales) asociados a esas tensiones en un caso concreto: el parque natural de la Albufera, en el País Valenciano¹.

El parque natural de la Albufera tiene una superficie de 21000 hectáreas y está situado al sur de la ciudad de Valencia, junto al mar Mediterráneo. Su valor ecológico ha sido reconocido mediante su inclusión en la lista de humedales de importancia internacional establecida por el convenio RAMSAR. Es especialmente significativa su función como refugio de aves acuáticas: 250 especies usan regular o esporádicamente este espacio y unas 90 se reproducen en él. La conservación de los valores naturales de la zona está amenazada por la contaminación de origen industrial, urbano y agrícola, la urbanización de la franja arenosa del litoral para usos turísticos, la desecación de marjales y la expansión de carreteras, instalaciones portuarias y otras infraestructuras (Sánchez Díaz, 1991:49-60). Aunque el cultivo

del arroz, la caza y la pesca se han practicado durante siglos de una forma relativamente integrada en el medio ambiente natural y forman parte de la tradición cultural de la zona, algunos desarrollos recientes están rompiendo el equilibrio entre conservación y usos tradicionales.

En este papel se presenta un modelo analítico para el estudio de los conflictos sociales surgidos a raíz del choque entre finalidades relativas a la conservación, a los usos tradicionales y al desarrollo. Dicho modelo ha sido elaborado primeramente de una forma abstracta, teórica, y ha sido aplicado posteriormente a este estudio de caso, en una investigación realizada entre 1991 y 1995². El primer paso consiste en la determinación de la matriz de funciones asignadas a los recursos naturales existentes en el área estudiada, distinguiendo usos conflictivos y usos compatibles. Paralelamente, se traza el mapa de las posiciones sociales asociadas a dichos usos, distinguiendo tres categorías principales (promotores del desarrollo, agencias gubernamentales y grupos de interés locales) y delimitando las perspectivas propias de los diferentes actores integrados en cada una de ellas (por ejemplo: administraciones responsables de la industria, de las obras públicas, del medio ambiente, etc.; grupos de cazadores, agricultores, ambientalistas, etc.). En el marco así definido, se analizan los puntos de vista y las prácticas de los diferentes agentes sociales activos en la zona y presentes en el debate. Como material para este análisis se ha utilizado una serie de entrevistas realizadas a representantes de los principales intereses implicados³, así como diversas fuentes secundarias. El mutuo reforzamiento entre grupos conservacionistas, medios de comunicación y opinión pública es considerado a fin de perfilar adecuadamente el proceso de configuración de la presión social favorable a la conservación. Una encuesta ha sido la base para analizar la opinión y los valores de la población⁴.

El método aplicado, que combina técnicas de investigación social cualitativas y cuantitativas, permite no sólo describir la situación presente, sino también evaluar los condicionantes que las formas existentes de conflicto y consenso social imponen a los planes que pretenden asegurar la conservación del medio en el futuro. El concreto caso estudiado, por otra parte, presenta características de contexto social que no son excepcionales, que son semejantes a las de muchos

otros espacios de interés ecológico en el litoral mediterráneo.

En el caso de la Albufera se ha producido, durante los primeros años de vigencia de los planes proteccionistas, una fuerte polémica, tanto sobre el contenido de los mismos como sobre su aplicación. A principios de los noventa, cinco años después de la declaración como parque natural, desde el movimiento ecologista se expresaba insatisfacción: «el plan continúa incumpléndose sistemáticamente, continúa habiendo aterramientos, edificación de naves industriales, falta de control de los vertidos, es decir, continúa siendo un absoluto desastre» (AEA). La Administración se adaptaba lentamente a la redefinición de prioridades, no sin conflictos internos, sectoriales y territoriales. Los responsables justificaban la situación diciendo que, pese a las contradicciones, las cosas comenzaban a marchar: «En la Albufera menos que en otras partes, está más mirada, todo lo que es ilegal está detectado, denunciado y en curso de revocación» (CMA). Los grupos de intereses locales se lo miraban todo con cierta calma, entre el rechazo y el escepticismo, con el convencimiento de que las actuaciones de verdad no serían inmediatas; con un estado de ánimo que un campesino favorable al parque resumía así: «En la práctica no se están haciendo demasiadas cosas, pero tampoco se está haciendo mucho en prohibiciones» (ULR). Mientras tanto, entre la población ha ido creciendo una opinión favorable a la conservación de la Albufera, unida a la confianza en que su salvación será posible. En noviembre de 1993, más del 75% de los habitantes del área metropolitana de Valencia se declaraban de acuerdo con la afirmación de que el parque podría mantenerse como espacio natural si la actuación pública y la colaboración ciudadana sumaban sus efectos; por contra, sólo un 15% se manifestaba pesimista y pensaba que, con tanta gente y tantas industrias a su alrededor, el parque estaba condenado.

1. La anatomía del conflicto



Un conflicto ecológico-social se produce cuando hay grupos, organizaciones u otros agentes sociales que consideran que determinada activi-

dad económica implica una explotación excesiva de recursos naturales o una contaminación excesiva. A un nivel muy abstracto, podría decirse que es un conflicto entre ecologismo y productivismo. El ecologismo (o transindustrialismo) tiende a un uso parsimonioso de las fuentes naturales de energía y materiales, a evitar alteraciones catastróficas de los equilibrios ecológicos que mantienen la vida y a regular equitativamente la distribución entre los humanos y los demás seres vivos. El productivismo (o industrialismo) tiende a la máxima explotación de las fuentes de baja entropía, a ignorar las funciones naturales valiosas para el bienestar y a maximizar la parte de los recursos de la Tierra correspondiente a la especie humana. Quienes aman las grandes abstracciones podrían detenerse aquí. De hecho, esas categorías definen una de las tensiones internas fundamentales de la actual civilización, caracterizada por la «bulimia creciente de las grandes metrópolis» (Mumford, 1964:671).

Ahora bien, si mantenemos que cualquier conflicto ecológico-social puede ser descrito únicamente en base a la dialéctica entre ecologismo y productivismo, nos encontramos de inmediato con dificultades. El nivel de abstracción es demasiado alto. Para introducir un poco más de complejidad y de concreción habría que examinar el impacto que la distribución de los recursos naturales y los costos ambientales tiene sobre la estructura social. Las propuestas al respecto son prometedoras. En cuanto a la definición de clases de consumo con criterios ecológicos (Durning, 1992). A la definición de clases de producción con el mismo tipo de criterios (Altvater, 1994, Gadgil & Guha, 1995). O al examen de nuevas formas de articulación de la sociedad a partir de la distribución de los riesgos tecnológicos (Beck, 1995). Sin embargo, aún están poco elaboradas y hay muchas dificultades para aplicarlas en investigaciones muy localizadas en el tiempo y el espacio. Si, por el contrario, se intenta partir de alguna de las teorías corrientes de la estructura social, la cosa tampoco funciona. Muy a menudo, las categorías de clase social, sexo, edad, nivel educativo o hábitat resultan poco o nada relevantes. Probablemente, una modelización mínimamente realista de los conflictos ecológico-sociales deberá combinar formas de estructuración basadas en el interés económico y en el género con otras basadas en la distribución del acceso a los

recursos naturales y de los riesgos. Esta investigación se ha planteado como un estudio de caso preparatorio y se ha seguido en ella un camino fundamentalmente empírico.

Con frecuencia, los conflictos ecológico-sociales tienen tres polos de referencia. El Estado, prolongado por las administraciones territoriales o las empresas públicas, que decide las formas y contenidos de la gestión, aunque muchas veces los distintos departamentos siguen diferentes orientaciones sectoriales con diferentes prioridades (OCDE, 1993:102). Los grandes promotores privados del desarrollo, a menudo ajenos al área afectada. Y los grupos locales: asociaciones conservacionistas, núcleos de intereses —agricultores, hosteleros, comerciantes...— y élites locales prolongadas por su influencia sobre los Ayuntamientos (Lafaye & Thévenot, 1993:497).

En este estudio se han introducido también informaciones relativas a la opinión pública. No es una combinación habitual. En la sociología ecológica, el estudio de la opinión pública y el estudio de problemas concretos de la gestión de un espacio o un recurso han ido hasta ahora por separado. Sin embargo, creo que una cierta integración es procedente, porque el papel central que el movimiento ecologista tiene en procesos de este tipo no se explica sin tener en cuenta el eco que encuentran sus propuestas y denuncias en los medios de comunicación y, a través de ello, el apoyo que ganan en la opinión pública: «Aunque los movimientos sociales son encabezados por activistas y organizaciones, con frecuencia su éxito o fracaso está fuertemente influido por el grado de apoyo que reciben de un público más amplio» (Dunlap, 1992:89). La aprobación de la opinión pública proporciona a los ecologistas un recurso clave para la presión, en tanto que da credibilidad a la pretensión de que representan el interés general.

Aunque la mayoría de la población ha asumido puntos de vista ambientalistas, los comportamientos coherentes son más escasos, y aún más minoritaria es la participación en prácticas colectivas. En el área metropolitana de Valencia, en 1993, el 70% de la población consideraba grave el estado del medio ambiente local, el 47% declaraba seguir con interés las noticias sobre estos temas, el 28% decía haber sustituido algún producto de consumo por razones ambientales y sólo el 3,6% colaboraba de algún modo con grupos ecologistas. La disocia-

ción entre creencias, valores y conductas es el resultado de dos consensos, productivista y ambientalista, superpuestos de tal forma que el primero es a menudo más fuerte, aunque el equilibrio es inestable y cambia ocasionalmente. Es una estructura de doble vínculo, que impone a las personas dos mandamientos contradictorios: «vive como si la naturaleza no importara porque, de lo contrario, te amenazan la pobreza y el paro» y «protege el medio ambiente para no verte abocado a la catástrofe y la extinción». Que esta estructura induzca ansiedad y parálisis, inestabilidad de prioridades y comportamientos, no es sorprendente. Ahora bien, una estructura inestable e inconsistente está abierta a muchas posibilidades, abierta al cambio. Por eso es pertinente la observación de Dunlap (1992:113): «La gente está preocupada por la degradación del medio ambiente y quiere ver que se hace algo. Pese a que es fácil cuestionar la profundidad de esta preocupación señalando su relativamente limitado impacto en las conductas, tal vez lo que haría falta es un liderazgo mejor, a fin de aprovechar la inquietud del público y traducirla en acción efectiva».

1.1. Los nudos de conflicto y de cooperación

La tabla 1 contiene el modelo básico del análisis, siguiendo las categorías de desarrollo, usos sostenibles y conservación. La decisión social de proteger los valores naturales de la Albufera implica limitar en su entorno las posibilidades de desarrollo, buscando un equilibrio ecológicamente compatible y económicamente viable entre la conservación, las formas tradicionales de explotación de los recursos locales y algunas actividades económicas nuevas de bajo impacto. La presentación esquematizada da a la tabla una apariencia aritmométrica que es una extrema simplificación de las cosas: estamos más bien ante un sistema de conceptos con contornos borrosos y de relaciones no lineales.

Los puntos D1 a D4 corresponden al *desarrollo* convencional. La distinción por sectores corresponde, a grandes trazos, con la problemática de la zona: «modernización» de una agricultura cada vez más dependiente de insumos industriales, expansión industrial, urbanizaciones y servicios turísticos, creación de

Tabla 1

Nudos de conflicto y de cooperación en la relación entre el desarrollo (D), las actividades tradicionales (T) y la conservación de la naturaleza (C) en el Parque Natural de la Albufera

	D1.	D2.	D3.	D4.	T1.	T2.	T3.	T4.	C1.	C2.	C3.	C4.	C5.
D1. Agro-industria													
D2. Industria	*												
D3. Urbaniz. turism.	*												
D4. Infraestructuras	+	+	+										
T1. Arrozal	*	*											
T2. Caza	*	*	*		+								
T3. Pesca	*	*	*										
T4. Recreación			*+	*+									
C1. Restinga	*		*	*					*				
C2. Lago	*	*	*	*+	*	*	*+			+			
C3. Marjal	*	*	*	*+	+	*				+	+		
C4. Otros parque	*		*							+	+	+	
C5. Resto cuenca	*	*	*	*						+	+	+	+

* Indica potencialidad o existencia de conflicto

+ Indica potencialidad o existencia de consenso y refuerzo mutuo

nuevas infraestructuras o ampliación de las existentes (carreteras, tendidos eléctricos o telefónicos, puerto, colectores y depuradoras...). Los puntos T1 a T4 corresponden al mantenimiento y consolidación de las *actividades tradicionales*, más o menos sostenibles: arrozal, caza, pesca, visitas con fines recreativos. Los puntos C1 a C5 corresponden a la *conservación* de la biodiversidad y, en general, de los valores naturales. Se han distinguido cinco zonas para las que los planes establecen diferentes niveles de protección definidos según las líneas de la directiva europea Hábitats (Conselleria de Medi Ambient, 1994:9, 77-78).

Hay una fuerte contraposición entre conservación y desarrollo. Los cruces entre objetivos propios de estas dos áreas constituyen muchos de los principales nudos del conflicto. La lógica del desarrollo choca también con el mantenimiento de muchos usos tradicionales, si bien los conflictos son menos explícitos debido a la condición subalterna de estos últimos. Más compleja es la relación entre conservación y usos tradicionales, con puntos de conflicto y también relaciones complementarias, como la que mantienen el cultivo de arroz y la conservación del marjal. Por otra parte, los diferentes objetivos proteccionistas son fuertemente complementarios. Hay también una cierta integración funcional de los diferentes ámbitos de desarrollo, si bien, por definición, no son complementarios: hay puntos de conflicto en las opciones de uso del suelo y en la tendencia a la sustitución intersectorial que genera una permanente crisis agraria.

La existencia del parque natural, pues, implica limitar drásticamente todos los procesos de desarrollo que implican una transformación radical del medio (instalaciones industriales y turísticas, infraestructuras duras, urbanizaciones, etc.). En este sentido, la aplicación del concepto de 'desarrollo sustentable' a la Albufera es inadecuada. Si acaso, podría decirse que cualquier proyecto de desarrollo sostenible del País Valenciano, se entienda como se entienda la expresión, deberá incluir la conservación del parque, con la consiguiente demarcación de un espacio en el cual las actividades económicas se reduzcan a la explotación sostenible —es decir, mantenida dentro de la tasa de reposición natural— de los recursos renovables.

1.2. *Dramatis personae: agentes colectivos e instituciones*

Entre los contrarios a los objetivos proteccionistas, a principios de los 90, había intereses inmobiliarios, agricultores que pretendían la desecación de arrozales, ayuntamientos de la zona sur del parque y algunas inercias y rutinas de diversos departamentos de la Administración (Agricultura, Obras Públicas, Industria); en el frente conservacionista se encontraban los grupos ecologistas y las sociedades de naturalistas, los pescadores, los ayuntamientos del norte, la administración medioambiental y la dirección política de la Generalitat (Agència del Medi Ambient, 1989). En ambas partes había conflictos internos y grados diversos de compromiso. Por parte de las organizaciones sociales, la mayor oposición al parque venía de algunas entidades agrarias. Así, la AVA ha planteado la nulidad de derecho y la inconstitucionalidad del Decreto que creó el parque. La Cámara Agraria Provincial de Valencia defendió que el ámbito de éste se redujera al lago y la Devesa. No hubo una oposición explícita procedente de los sectores industriales. Esto parece sorprendente, dado que muchas industrias vierten sus residuos a la Albufera, frecuentemente sin depurar. Parece, pues, que las medidas de protección del lago deberían afectar fuertemente sus intereses. Probablemente, el silencio se explica porque las actuaciones definidas por la Administración en este campo se centran en el sistema de colectores y depuradoras de iniciativa pública, con bajas cargas para las empresas.

El listado de alegaciones al PORN (1995) resume las posiciones cinco años después. La oposición más fuerte viene ahora de APEPNA, que reclama la anulación del decreto de protección y la reducción del parque al lago y la Devesa. Esta asociación representa sobre todo intereses de 'desarrollo', es decir, de algunas empresas de servicios o industriales que se identifican ahora como radicalmente incompatibles con las intenciones conservacionistas. Los intereses inmobiliarios, igualmente incompatibles con el parque, se expresan a través de los ayuntamientos, fundamentalmente el de Valencia, que reclamó la prioridad de la actuación urbanística municipal sobre la regulación medioambiental, y los del sur (Sueca pide urbanizar toda su zona marítima y Cullera quiere excluirse del parque). En cambio, por parte de

los campesinos, la oposición ha girado a posiciones menos extremas. AVA mantiene la petición de nulidad del Decreto pero se orienta más que hace unos años a negociar subvenciones para el arroz, que ya han comenzado a llegar por vía europea. Los cazadores pretenden aumentar el calendario general con seis días de cábilas y con los días de tirada tradicionales. Los regantes piden libertad para cubrir con cemento los márgenes de las acequias y permisividad para ensanchar los caminos, almacenes, graneros y secaderos. AVA, APEPNA, el Sindicato de Riegos de Sueca y los ayuntamientos de Sueca y Cullera han recurrido el Decreto del 93, pidiendo su derogación.

Entre 1989 y 1994 el mapa se ha mantenido constante, en líneas generales. Los cambios más destacables no modifican los alineamientos de forma sustancial. La oposición agraria se presenta de forma ligeramente menos radical; el Ayuntamiento de Valencia exhibe reticencias que no tenía en el 89, aunque no llega a cuestionar abiertamente el parque; la oposición más intensa procede de organizaciones nuevas (APEPNA Y AVADECA), constituidas precisamente a este efecto. En la primera de ellas están presentes algunos industriales y empresarios del terciario, afectados por sanciones en aplicación de las normativas de protección. Acceden así a la arena algunos intereses que no se habían manifestado públicamente hasta que la aplicación de las medidas proteccionistas ha comenzado a tener efectos reales, aunque no lo hacen como sector social sino más bien como «cofradía de damnificados». Colectivamente, los sectores industrial, inmobiliario y hostelero continúan siendo agentes ocultos, que actúan a través de políticos locales.

1.3. El ecologismo, un interlocutor incómodo

Los políticos y los técnicos de la Administración han percibido la incidencia de las propuestas ecologistas como resultado de un «exceso de legitimación», que han tratado de contrarrestar con diversos argumentos. El más habitual, seguramente, es la distinción entre las denuncias y las propuestas de los ecologistas, útiles las primeras e improcedentes las segundas: «Todo radicalizado y en sus manos podría ser una catástrofe, pero como no es así, creo que

hacen un papel muy interesante, porque sirven como movimiento de denuncia» (CA). También es habitual la distinción entre ecologistas «buenos» y «malos», entre los que aceptan limitarse a las posibilidades ofrecidas por los mecanismos establecidos de toma de decisiones y quienes no renuncian a una actuación autónoma y, por tanto, «incontrolada»: «...la parte de ecologistas radicales... ese radicalismo... querían que nadie se acercase a la Albufera» (CMA). Otra pieza del discurso de deslegitimación consiste en negar, no el contenido de las propuestas ambientalistas, sino su urgencia; así, la actuación debería aplazarse hasta que haya más riqueza y más recursos, hasta que se hayan resuelto otros problemas más apremiantes (la competitividad, el paro, etc., según las modulaciones ideológicas): «Los grupos ecologistas irán teniendo cada vez un efecto mayor, porque hay un nivel de vida más alto, y entonces la gente tendrá también más necesidad de calidad de vida y querrá preocuparse por el medio ambiente» (PSOE); el plan de la Albufera «es un buen principio, lo que pasa es que tampoco se puede imponer a marchas...» (UV). Finalmente, hay el argumento que niega autonomía o identidad propia al discurso ecologista, presentando su incidencia como efecto de un déficit coyuntural de la visión convencional: «Los ecologistas existen porque los partidos tradicionales de la izquierda no han tenido esa sensibilidad, ese olfato fundamental» (IU). Existe pues, al menos hasta ahora, una visión básicamente unificada de los políticos, abierta sólo a matices: una forma compartida de argumentación «políticamente correcta», que no descalifica frontalmente al ecologismo pero procura restarle legitimidad, cuestionando la urgencia, la intensidad o la autonomía de sus puntos de vista.

Entre los políticos tienen poca presencia, en cambio, las negaciones sustanciales, mucho más visibles en el discurso de los grupos de interés económico. Oponiendo la ciencia de los ambientalistas al conocimiento «real» de quien vive los problemas: «lo primero que tendrían que hacer es llamar a quienes de verdad conocen el parque y viven de él, a quienes realmente les conviene que la zona esté bien» (AVA). Presentando a los ecologistas como un grupo que no piensa en el interés general sino en su propio beneficio particular o corporativo: «trabajan para la Administración, o hacen trabajos de fin de carrera» (AVA). Identificándolos con

el esteticismo caprichoso de las gentes de ciudad: «... está de moda eso de ser ecologista y queda bien decir que se está haciendo un parque monumental, llena mucho... pero se mueven en un mundo distinto al nuestro, en una visión de postal; nosotros tocamos y pisamos y sacamos beneficios del parque, pero ellos tienen una visión del todo distinta, van exclusivamente al medio ambiente y entonces la preocupación fundamental es que el patito esté bonito» (AVA). Incluso quienes son más favorables al parque, como los pescadores, dan rienda suelta a una impaciencia crispada: «Claro, se queda en estudios... ahí hay unos biólogos que se dedican a curar aves que no dan producto, a plantar hierbas que no aprovechan para nada... ellos tendrán sus estudios y sus cosas pero yo no veo adelanto ni nada» (CPP). Hay, finalmente, la descalificación basada en la poca fuerza real del ecologismo, percibido como simple coartada: «El político, cuando quiere, suelta el rollo de que algo no se puede hacer porque los biólogos no quieren; y es el político de turno quien no quiere» (AVS).

No es fácil percibir qué camino podrían seguir las posibles mediaciones. Quizás el funcionamiento de instituciones de participación para la gestión del parque, en la medida que permite la interacción de políticos, usuarios y ecologistas en un espacio común, puede favorecer alguna modificación en las líneas arriba resumidas. Porque una cierta coincidencia de objetivos entre ambientalistas y usuarios tradicionales sí que existe. En boca de un pescador: «Los grupos ecologistas, si se hiciera lo que dicen que se ha de hacer no nos vendría mal, porque tienen la idea de limpiar las aguas, y que la naturaleza salga y eso sería un bien» (CPP). En la primera mitad de los 90, sin embargo, estas líneas de superación o síntesis del conflicto han sido poco menos que marginales, ocupando un lugar secundario en el debate ideológico.

2. Desarrollo o conservación



Este ámbito contiene los conflictos más importantes. De hecho, fue la ola de desarrollo iniciada en los 60, con los procesos de industrialización, urbanización y modernización agraria que la han carac-

terizado, la que ha llevado a una situación límite, alterando dramáticamente la relativa estabilidad que el lago y su entorno habían conocido a lo largo del siglo XX. El aumento de la contaminación de origen urbano, industrial y agrícola, la urbanización acelerada del litoral, la expansión de las infraestructuras y la sustitución del arrozal por otros usos han sumado sus efectos hasta la actualidad.

2.1. La contaminación

Diversas fuentes de contaminación minan severamente las condiciones para el mantenimiento de la biodiversidad en el parque. En buena medida son de origen directa o indirectamente industrial: vertidos de las fábricas (con altas concentraciones de metales pesados y otros tóxicos); abonos, pesticidas y plaguicidas químicos de uso agrícola; sustancias no orgánicas presentes en los residuos urbanos. En parte, también, son residuos orgánicos originados en las poblaciones o en la agricultura. Los ecologistas han denunciado reiteradamente esta situación: «La Albufera actúa como la alcantarilla de l'Horta» (AEA).

Casi nadie niega la gravedad de la contaminación. No obstante, es habitual un juego de responsabilidades cruzadas, en el que cada agente implicado asevera que el daño principal es causado por otros. Los campesinos y los portavoces de la Conselleria de Agricultura acusan a las industrias y a las poblaciones: «El primero, los residuos urbanos, es el primer contaminante; el segundo, el industrial; y el tercero y último, el agrícola» (AVA); «el problema mayor de la Albufera no es la agricultura, sino los vertidos de las fábricas» (CA). Desde el sector industrial se pasa la pelota a los labradores: «Es que el abono lo gastan como si fuese... y ponen nitratos para parar un tren» (DGI).

En marzo del 94, la Administración autonómica reconocía que seguía llegando a la Albufera agua contaminada procedente de numerosos polígonos industriales y que el sistema de colectores recogía ya el 90% de las aguas residuales urbanas pero sólo el 10% de las industriales. La propensión a hacer la vista gorda había sido la norma autonómica y municipal, y en buena medida aún lo es. En 1991, las administraciones responsables del desarrollo industrial reconocían que no se ocupaban del problema: «... son empre-

sas que están desde hace tiempo, que yo no sé si vierten o no vierten y a dónde vierten; en principio sí tenían unas normas, pero la verdad es que nosotros no lo controlamos, no sé si Medio Ambiente debe hacerlo» (DGI). Por su parte, Medio Ambiente recordaba la existencia del canon de vertidos, con un formalismo impasible: «Sí, siempre que la empresa vierte directamente a un cauce público paga el canon, y si lo hace a la alcantarilla con permiso del ayuntamiento, entonces se registra y se paga el vertido final» (CMA). Algunos reconocían que el cumplimiento de las normas depende de la presión ejercida, y que muchas veces ni siquiera ésta basta: «A lo mejor tienen una demanda por delito ecológico, ahora se vigila más, y entonces los hombres ante esa amenaza pues vienen y quieren conectarse al colector, pero siempre hay el clandestino» (CMH). El paso a una situación más racional (canon de conexión previa depuración en la factoría) se consideraba todavía a principios de los 90 como una hipótesis de futuro. Las razones de esta situación son diversas. Los ayuntamientos tienen interés en mantener las contribuciones de las empresas enclavadas en su término. Todas las administraciones son sensibles a la amenaza recurrente de pérdida de puestos de trabajo: «La sanción sería cerrar todas las empresas, eso lo permite la Ley de Aguas; pero ¿cerramos o no una industria? Nosotros intentamos vehicular estas cosas, canalizarlo todo hasta una gran depuradora... y eso que las industrias no deberían funcionar sin tener el problema resuelto, pero claro, una industria sin depuradora funciona, sin almacén no funciona... La alternativa era empezar a cerrar fábricas, de hecho hay un industrial en Silla condenado por delito ecológico, se va a Marruecos...» (DGOP).

Pese a que la opinión es abrumadoramente favorable a que los sectores industriales interioricen sus costes ecológicos (tabla 2), la situación resultante de todo lo anterior es descrita concisamente por los ecologistas: «Aquí, el que contamina no paga» (AEA). Y por los pescadores: «La Albufera no es que se muere, es que la matan» (CPP). Y, ni siquiera como hipótesis, va más allá del principio 'quien contamina paga', tan discutible: «nadie puede pagar lo que contamina, porque nunca se saben la magnitud y el alcance de una contaminación» (ULR).

La contaminación agrícola procede de herbicidas (a menudo los que se usan son inadecuados), abonos nitrogenados (usados en exceso) y

tratamientos contra las plagas. Los pesticidas se usan más desde que se hace la siembra directa, para matar peces y cangrejos americanos a fin de que no se coman el arroz: «entonces, en mayo, las acequias de la Albufera son un río de peces muertos» (AEA). Aunque el apoyo del público a un mayor control de los productos químicos sería claro (tabla 2), las dificultades y las resistencias son grandes. Ha habido una apreciable difusión de sistemas antiplaga alternativos. En 1991 se trabajaron 3000 Ha. con tratamientos biológicos contra el *cucat*. Sin embargo, la alternativa al empleo masivo de insumos químicos continúa siendo una cuestión abierta. En todo caso, el debate sobre contaminación y agricultura afecta profundamente a las opciones básicas de gestión del parque, y permite que, a veces, los campesinos comprendan las interconexiones ecológicas mejor que muchos expertos: «Yo pienso que limpiar la Albufera no es sólo limpiar el lago, sino mucho más. También el mar debería estar limpio, porque a veces la Albufera está más honda que el mar y tenemos que bajar las compuertas porque si no entraría. Y si la mar no está limpia también nos puede contaminar» (ULR). Hasta la redacción del PORN, en 1995, los documentos oficiales no han tenido a penas en cuenta las relaciones ecológicas con sistemas externos a los límites del parque.

2.2. Urbanizaciones

La construcción de urbanizaciones cerca de las playas ha sido en las últimas décadas el más destructivo de los impactos sobre la restinga y ha ocasionado numerosos conflictos. De hecho, la movilización ciudadana contra la privatización y la construcción de chalets y apartamentos en la Devesa fue, aún bajo el franquismo, uno de los episodios iniciales del proceso que ha llevado a la declaración del parque. El principal grupo de presión interesado en la cuestión, el de la promoción inmobiliaria, no ha intervenido como tal en el debate. Lo ha hecho indirectamente, a través de políticos locales, del impulso dado a la oposición de otros grupos y del apoyo a asociaciones como APEPNA.

Más de veinte años después de la campaña «El Saler per al poble» siguen vivos en el gobierno municipal de Valencia argumentos como éste: «Bueno, es que la gente quiere ir, no puede decirse que es que la empresa privada está inte-

Tabla 2
Opinión sobre diversos conflictos planteados en la gestión del Parque Natural de la Albufera

(Población de 18 y más años de Valencia y su área metropolitana, 1993)

	1	2	3	4	5	6	
							1. Muy de acuerdo con la afirmación de la izquierda 2. Más bien de acuerdo con la afirmación de la izquierda 3. Indeciso/a 4. Más bien de acuerdo con la afirmación de la derecha 5. Muy de acuerdo con la afirmación de a derecha 6. Ns/Nc
La inversión en carreteras y autovías debería reducirse para dedicar más dinero a descontaminar la Albufera	41,2	10,2	27,7	7,5	11,6	1,7	La construcción de más carreteras y autovías es prioritaria, aunque quede menos dinero para descontaminar la Albufera
El uso de abonos químicos, herbicidas y pesticidas debería limitarse en la Albufera, aunque disminuyera la rentabilidad de los cultivos	58,8	14,1	12,0	3,9	8,5	2,7	La agricultura en la Albufera debe aumentar su producción usando abonos y pesticidas modernos
La desecación de terrenos para sustituir el arroz por otros cultivos más rentables no debe permitirse en la Albufera porque es dañina para la naturaleza	51,1	10,4	15,6	5,4	12,1	5,4	Los propietarios de tierras en la Albufera deben tener derecho a desecarlas para sustituir el arroz por otros cultivos más rentables
La caza es perjudicial para las aves de la Albufera y debe ser limitada severamente	52,0	11,2	15,4	6,7	10,9	3,8	La caza en la Albufera ha de continuar porque es una costumbre establecida y porque los cazadores alimentan y cuidan las aves
Las empresas que vierten a la Albufera deben pagar el tratamiento de los residuos que producen a fin de no contaminar el lago	84,2	3,5	4,4	1,7	4,9	1,1	Cuando hay crisis económica no pueden aumentarse las cargas de las empresas, y por eso es la Administración la que debe pagar el tratamiento de los residuos para que no contaminen la Albufera
La costa desde el Saler hasta Cullera es una parte importante del parque natural y no deberían permitirse en ella nuevas construcciones	59,1	11,4	14,1	4,1	7,1	4,2	Hacen falta más urbanizaciones junto al mar entre el Saler y Cullera porque mucha gente desea pasar sus vacaciones y fines de semana en la playa
El Saler es parte de un parque natural y debe ser protegido restringiendo el acceso de la gente	14,2	10,2	10,0	17,9	46,0	1,6	El Saler debe ser, sobre todo, un lugar de amplio acceso para actividades de tiempo libre de la gente
La circulación de coches y motos es perjudicial en un parque natural, y por eso no deben ampliarse las carreteras en el área de la Albufera, ni deben construirse otras nuevas	38,6	18,5	19,1	8,0	12,0	3,7	El Parque Natural de la Albufera debe poder ser visitado y disfrutado por todos. Por eso hay que ampliar las carreteras que lo atraviesan

resada en hacer negocio, no, si se hacen apartamentos es porque todos los valencianos queremos ir» (UV). Pese a que la opinión mayoritaria es más bien la contraria (tabla 2), muchos políticos de los municipios con fachada marítima confunden urbanismo con urbanizaciones, pretenden que el parque no les afecte y presionan para modificar sus límites: «Para nosotros el urbanismo es riqueza, no es la panacea, pero no entendemos por qué no podemos desarrollarnos también por esa zona... el parque se extralimita en su limitación geográfica» (AC). El valor ecológico de los espacios afectados (una zona de dunas relativamente bien conservadas, en el caso de Cullera) no se considera: «Yo, si he de ser sincero, desconozco de una forma importante en qué grado se conserva el parque de la Albufera, deberían conservarse los arrozales, pero las zonas que están lejos del lago, ahí tendrían que ser más permisivos» (AC).

De las actividades económicas presentes en la zona, la construcción es la más radicalmente incompatible con la conservación. El conflicto entre ésta y los usos tradicionales puede encontrar vías de mediación. La contaminación industrial y urbana puede ser amortiguada con obras de saneamiento y depuración. Pero la expansión del asfalto no deja alternativa. Algunos residentes que viven de actividades tradicionales lo ven claro: «Los intereses de los constructores son los que han jugado más fuerte; y lo que han hecho es echar mano de los colectivos donde podía haber descontentos, cazadores, labradores, colectivos más numerosos que ellos» (ULR).

Un caso especial es el campo de golf del Saler. Según cálculos de Acció Ecologista-Agró, consume cada año una cantidad de agua que bastaría para una población de 250000 habitantes (o el 10% de lo que se reclamó en trasvases del Tajo al Segura en el crítico verano del 95). La falta de aportaciones de agua se está convirtiendo en una de las amenazas más graves a la supervivencia del lago. Así las cosas, hay que concluir que los desarrollos turísticos «sofisticados» y de «calidad» no son una alternativa a la urbanización extensiva.

2.3. Infraestructuras: las prioridades de la actuación pública

¿Carreteras o depuradoras? ¿Polígonos industriales o zonas verdes? La vieja polémica

sobre el modelo valenciano de desarrollo y sus efectos (Gaviria, 1974) sigue de actualidad. La descoordinación de las administraciones y su inevitable efecto, el conflicto entre prioridades divergentes, debe aún ser reseñada.

Industria continúa con sus criterios de siempre: «Si nos pasamos en la protección de la naturaleza, al final tal vez tendremos la naturaleza muy protegida, pero no productos para vender» (DGI). Criterios que llevan a no ser muy exigentes con el cumplimiento de las normativas ambientales: «Cuando vienen épocas de crisis, claro, levantamos un poco la mano, porque si encima de que hay crisis empiezas a apretar a tope el tema... hay que apretar pero no ahogar» (DGI). Y a ver las cosas con mucha calma: «Habrà que entrar desde el principio, desde el diseño de la fábrica, con variables ambientales y no sólo económicas; lo que pasa es que, claro, tienen que pasar treinta o cuarenta años...» (DGI).

La Ley del Suelo obliga a hacer depuradoras y, por eso, todos los planes de ordenación urbana las tienen previstas. Pero una poderosa inercia histórica perpetúa una situación en la que «se hacen las casas y no se hacen las depuradoras» (DGOP). Hay cambios en este terreno. Un importante programa público de redes de captación y depuración de aguas residuales avanza con lentitud en el área de la Albufera. Cuando se inauguró el colector Oeste, a principios de la década, recogía el 10% de su capacidad, «y eso significa que el 90% continuaba contaminando la Albufera» (CMH). En 1994, fuentes oficiales reconocían que se había realizado la cuarta parte de la inversión prevista en infraestructuras de saneamiento en el área del lago (*Levante*, 16/III/94). La promoción de grandes infraestructuras, por contra, recibe un entusiasta soporte institucional. La expansión del puerto, por ejemplo: «El puerto de Valencia tendríamos que ver si la riqueza que aporta no compensa el que pudiera tener algún efecto... es de los cinco o seis principales del Mediterráneo» (DGOP). Esta ampliación reduce drásticamente la viabilidad del proyecto, contenido en los planes del parque, de potenciar la playa de Pinedo como forma de reducir la presión humana sobre la Devesa.

Parece que un cambio de prioridades en este ámbito tendría más apoyo del público de lo que se acostumbra a decir (tabla 2). Incluso podría contar con la disposición de partes minoritarias

pero significativas de la población a asumir costes económicos directos (tabla 3). Y, desde luego, ilusionaría a quienes viven de los recursos del lago, los más impacientes: «La solución rápida es coger mano de obra y hacer colectores... costará muchos millones y muchos disgustos a las industrias, pero a pagarlo, porque ahora lo paga la Albufera, que parece un basurero» (CPP).

2.4. Propiedad privada e interés público

El sentimiento de que el parque impone limitaciones excesivas al derecho de propiedad está en el centro de la oposición a las políticas proteccionistas y de la amenaza más peligrosa que pesa sobre el futuro de la Albufera: el intento de reducir los límites del parque a la laguna estricta

ya, si acaso, a la Devesa del Saler, intento hacia el que la nueva administración autonómica salida de las elecciones del 95 parece mucho más favorable que la anterior.

El conflicto nace, en primer lugar, de una resistencia muy arraigada, no ya a regulaciones extraordinarias, sino a la ordenación del territorio en general. Una secular desconfianza hacia la Administración, con bastante fundamento histórico, forma parte de la cultura de la zona: «Desde el siglo XIII hasta hoy, la población acogida en la Albufera ha tenido que moverse al margen de la ley, y de una manera casi sistemática. Las prohibiciones de pescar, de cazar, de cortar leña en la Devesa, de llevar allí las cabras a pastar, de sanear marismas, han sido insistentes y circunstanciadas. Algún rey medieval llegó a amenazar con la pena de muerte y todo. Pero el hambre es superior a las leyes. Hoy, la

Tabla 3
Disposición a dedicar recursos monetarios para la conservación de la Albufera

(Población de 18 y más años de Valencia y su área metropolitana, 1993)

	1	2	3	4	5	6	
	1. Muy de acuerdo con la afirmación de la izquierda 2. Más bien de acuerdo con la afirmación de la izquierda 3. Indeciso/a 4. Más bien de acuerdo con la afirmación de la derecha 5. Muy de acuerdo con la afirmación de a derecha 6. Ns/Nc						
Pagaría precios más altos para consumir arroz y verduras cultivados sin productos químicos en el parque natural de la Albufera	50,2	13,3	11,9	8,9	14,3	1,3	No pagaría precios más altos para consumir arroz y verduras cultivados sin productos químicos en la Albufera
Hay que dar ayuda económica a los labradores de la Albufera para que mantengan el cultivo del arroz, que amplía la zona húmeda del parque natural	40,0	17,0	14,2	6,7	16,5	5,5	No hay que dar ayuda económica a los labradores de la Albufera por mantener el cultivo del arroz, pues conservar el parque natural nos cuesta dinero a todos
Depurar las aguas residuales que van a parar a la Albufera es algo que debe hacerse urgentemente, aunque haya que incrementar razonablemente el recibo del agua	24,2	9,5	17,2	8,0	36,5	4,6	Depurar las aguas residuales que van a parar a la Albufera es algo que se puede ir haciendo poco a poco, sin que tengamos que pagar más en el recibo del agua
Estaría dispuesto/a a pagar un pequeño impuesto especial destinado exclusivamente a proteger la Albufera	16,4	7,4	7,8	6,3	61,5	0,6	La Albufera debe ser protegida por la Administración, sin aumentar lo más mínimo los impuestos

miseria ya no es oprobiosa, pero la inercia de incumplir los reglamentos administrativos continúa como siempre» (Fuster, 1993:107). La inercia y, sin duda, una buena dosis de oportunismo: «quieren coger esto también como parque, y no hay derecho, ellos que hagan el lago y la Devesa, que son del patrimonio de todos los valencianos y de todos los españoles, pero que no quieran mandar sobre el término de Sueca» (SCS). Es cierto que cualquier política mínimamente conservacionista en la zona ha de comportar restricciones. Pero, muchas veces, lo que se percibe como imposición ultraecologista («se nos puso un parque natural casi por decreto» (AVA)) no es más que aplicación de legislación ordinaria.

Otro motivo es del tipo del agravio comparativo: «Con esas limitaciones nos consideramos muy... ¿cómo te lo diría? no podemos avanzar igual como lo puede hacer Sevilla a la hora de producir» (AVA). ¿Cuáles son las oportunidades perdidas? En primer lugar, la de especular con el suelo: «Si no existiera el parque, algunos terrenos se revalorizarían, porque quieras o no, de tener sólo un cultivo de arroz que te va a dejar en la miseria a tener un buen negocio y poder venderlo... hoy se paga y mañana no porque han trazado una línea ahí ¡maldita sea los que trazaron la línea!» (AVA). En segundo lugar, la de realizar transformaciones agrarias: «A nosotros nos importa mucho no poder cambiar de cultivo, nos obligan a que sea siempre arroz y nada más que arroz» (AVA). En tercer lugar, la de realizar obras como la cementación de acequias o el ensanchamiento de caminos y almacenes, justificadas a veces por el «progreso tecnológico» («cada vez los tractores, los remolques y las cosechadoras son más grandes, no caben en los caminos» (AVA)) y potenciadas en otras ocasiones por una cierta propensión a la exhibición grandiosa: el visitante de la marjal puede descubrir caminos, no diré que tan anchos como una autopista, pero no les falta mucho. En cuarto lugar, la de adaptarse con agilidad a condiciones comerciales cambiantes: «Lo que es normal en el mercado es que las crisis se solucionen, cuando un producto está en crisis dejas de hacerlo y haces otro, pero si te lo prohíben no estás en un mercado libre» (AVA). Posiblemente, la sensación de agravio comparativo se ve reforzada por un rasgo cultural que Fuster expresaba escribiendo que la gente de la Albufera, la auténtica, son pescadores y que, en

cambio, la de la Ribera ha vivido siempre su relación con el lago de una forma más distante (Fuster, 1993:30-31).

Las oportunidades perdidas llaman a la compensación. La subvención, palabra mágica de la agricultura europea, genera de inmediato la unanimidad: «no es tan peligroso siempre que hubiera compensaciones; con ellas, los campesinos serían los grandes beneficiarios del parque» (ULR); «subvenciones para los seguros contra el pedrisco, para el tratamiento de las plagas, para instalar bombas de regulación de las aguas» (CA); subvenciones para el cultivo del arroz y también -la nueva idea de la política «verde» europea- para mantener campos baldíos con carrizo y restablecer así en parte las condiciones originales del marjal (AEA). Las compensaciones han comenzado a llegar, desde la mitad de los 90: 700 millones de ptas./año como subvención a la agricultura «ecológicamente compatible» en la Albufera. Con independencia del escepticismo que pueda sentirse sobre el futuro de la agricultura subvencionada (o de la no-agricultura subvencionada, si la práctica de *gêler les terres* se extiende como medio para restablecer las condiciones naturales en espacios protegidos), es plausible la hipótesis de que la concreción de las subvenciones ha contribuido a la aparición entre los labradores de la Albufera de algunas actitudes más propicias a la negociación.

3. Desarrollo y usos tradicionales



Se examinan ahora algunos núcleos de conflicto que se manifiestan con muy baja intensidad. Lo que todos ellos tienen en común es el impacto del desarrollo sobre las actividades tradicionales, volviéndolas más penosas o difíciles, reduciendo su calidad o minando su viabilidad económica.

3.1. Agricultura

La contaminación del medio, causada en última instancia por el desarrollo industrial, no afecta sólo a la vida silvestre, sino también a las formas más directas de trabajo con la naturaleza: «Las industrias y los pueblos de alrededor,

que escurren todos los residuos que van a parar a la Albufera, pero es que también van a nuestros campos» (ULR). De hecho, el desarrollo ha deteriorado algunos aspectos de la vida de los campesinos: «¿Tú crees que habría alguien más interesado que nosotros en que las aguas vinieran limpias? nosotros que estamos dentro del agua, descalzos, que te salen granos en las piernas, que no había pasado nunca, que antes cuando la gente se iba a trabajar en el arroz muchos no llevaban agua, porque podía beberse de la acequia...» (AVA). Aunque en el motivo comentado se mezcla bastante de idealización nostálgica, de lamento por «los buenos tiempos perdidos», no es menos cierto que expresa toda una serie de dificultades reales para mantener la forma tradicional de ganarse la vida: «Somos arroceros y queríamos vivir del arroz, y que fuese rentable y que estuviese todo el tiempo» (AVA). Esto es bastante más que aferrarse a la tradición. Es la formulación de una muy justificada protesta frente a la eventual desaparición de una forma de vida, unos conocimientos, unas habilidades, unas formas contrastadamente viables de intercambio con la naturaleza.

3.2. Pesca

Los mismos motivos, con más carga emocional, están presentes en el discurso de los pescadores: «Antes no llevábamos agua, bebíamos de la Albufera, pero limpia, que se te caía un chavo y a quince metros lo veías, de clarísima que estaba... de eso hará más o menos venticinco años... Y ahora hasta las hierbas se han muerto, que había tantas que ni podías cruzar con la barca... Y estaba lleno de patos, había mucho alimento y muchas especies, samaruc, quisquilla, abundaba de todo... La pesca era muy abundante, porque la anguila tenía su gamba para comer, y la lubina también, que es un pez muy bueno y le gusta que la comida sea fresca, y se llenaba de lubinas la Albufera... Ahora, como no hay comida, la pesca y todos los patos y todo se va...» (CPP).

La denuncia de los efectos de la contaminación es ahora más compleja. Por una parte es más rotunda, más de fondo. Por otra es más cauta, medio paralizada por el miedo a que la difusión de la información dificulte la colocación de la pesca en los mercados: «Como hay tanta contaminación... bueno, viene de los resi-

duos de las acequias porque la Albufera no tiene contaminación... tiene unos *ullals* que ella misma se mantiene las aguas muy nuevas... eso que dicen de que la Albufera está contaminada... no lo está, porque nosotros llevamos la pesca a todos los mercados... la Albufera no está contaminada, lo que la contamina son los residuos que hay» (CPP). Esta espesa maraña de contradicciones, concentración de toda la ira acumulada y de la imposibilidad de escapar de la subalternidad de una actividad marginada por el desarrollo, no niega la realidad: «Sólo queda el mújol, se han perdido la lubina y el 70% de las anguilas» (CPP). Pero teme su publicación: «Luego dicen que han muerto quince mil kilos de pesca... el periódico y la tele dicen que la Albufera está enferma y que se mueren los peces... pero no mueren en la Albufera, sino en las acequias, y eso nos afecta porque el mercado ya no es igual, hay mala prensa» (CPP).

La pesca es, de todas las actividades tradicionales, la menos reconvertida por un proceso de «modernización». Seguramente, la capacidad de producción biológica del lago, incluso si estuviera sano, no da para megaproyectos. De hecho, la única práctica «desarrollista» introducida (la captura de angulas en las golas) ha tenido efectos más bien calamitosos, diezmando aún más las poblaciones de anguilas. Otras ideas en circulación, dirigidas a la implantación de cultivos acuáticos de gamba, anguila y lubina como alternativa a la pesca y de plantas de cañar y ribera como alternativa al arroz, son también problemáticas. Lo están siendo en otras partes del mundo y, previsiblemente, lo serán aún más en un espacio tan pequeño como la Albufera.

3.3. Usos recreativos

El desarrollo ha dañado el paisaje de la Albufera y su entorno. Y produce el lamento del «consumidor de naturaleza»: «Está hecha una porquería, plásticos, ovejas muertas, manchas de aceite, gente que tira todo lo que le viene en gana, nadie se preocupa, ni la guardaría» (AVS). Quien mira el parque natural como a un jardín no suele detenerse a pensar en el coste, y tiende a culpar al jardinero: «Quieren hacer ver que hay un parque natural que en realidad no está; bueno, existe porque está la naturaleza, pero no porque se preocupen de mantenerla... el parque

es un letrerito que les queda muy bien» (AVS). Los usuarios-productores no sienten mucha simpatía por el punto de vista de los visitantes: «esa gente del pueblo quiere un parque natural, y quieren venir y verlo todo muy bonito porque no tienen ningún interés aquí dentro» (AVA).

Ciertamente, la calidad del paisaje es incompatible con esa curiosa industrialización del excursionismo que es la proliferación de segundas residencias y de carreteras para llegar a ellas en coche. La sostenibilidad del uso recreativo de la Albufera depende de la imposición de límites muy severos a tal proliferación.

4. Conservación y usos sostenibles

El cultivo del arroz, la caza, la pesca y la visita a la pinada y a las playas son, en principio, usos sostenibles del parque natural. Sin embargo, en todos los casos hay complicaciones. Hasta ahora, no las incompatibilidades más hondas pero sí los enfrentamientos más apasionados se han dado precisamente en este ámbito. Sin embargo, hay mucha verdad en esta observación de un labrador: «Sólo los intereses inmobiliarios pueden perder con el parque. Los otros, pescadores, campesinos, cazadores, si las cosas se hacen bien, tienen bastante que ganar. Por eso habrá cada vez menos conflictos, porque el tiempo juega contra quienes no quieren el parque» (ULR). ¿Es una esperanza realista? Examinemos algunas piezas del rompecabezas.

4.1. La caza: un choque algo más que simbólico

En la Albufera, las aves ya no tapan el sol como una espesa nube, a diferencia de lo que Cavanilles escribió de su tiempo. Sin embargo, los cazadores siguen activos. En principio, la caza podría mantenerse sosteniblemente. Incluso los ecologistas están de acuerdo, y tienden a reclamar regulaciones más que una prohibición total: «Hoy por hoy, la caza es un descontrol; bien controlada podría ser un factor bueno» (AEA). La principal razón de esta tendencia al compromiso es la relación que hay entre la afición a la caza y el mantenimiento de

la inundación de las tierras de arroz: «los cazadores, en combinación con los campesinos, extienden la lámina, inundan sus campos después de segado y recogido el grano, y luego se cuidan de los patos, los ceban y tal... es cierto que mueren miles de aves, pero la prohibición sería hoy perjudicial, la Administración no podría conseguir que la gente inundara sus campos, o harían falta inversiones muy grandes; y los patos no tienen muchos otros sitios donde ir a comer» (CA). El argumento indica un punto de contacto real, porque la conexión entre el cultivo del arroz, la caza y el alimento de algunas poblaciones de la avifauna también lo es. La inundación de los campos tiene una razón -evitar la salinización de las tierras- que es agrícola, no cinegética, pero los dos intereses se refuerzan mutuamente. Y constituyen una forma de vida: hay campesinos en la zona que «en verano se dedican a la cosecha de arroz y en invierno van a la caza de los patos» (SCS).

Sin embargo, lo que aparece en primer plano no es el posible compromiso sino una tensión con mucha carga simbólica. Los grupos ambientalistas critican a la Administración por no controlar la caza. Sostienen que sobre el papel sí hay control, pero luego no hay vigilancia, hay poca guardería, los furtivos campan a sus anchas, los cupos no se respetan, se abaten ejemplares de especies protegidas... Reclaman también la supresión de las cábilas, una práctica que contribuye fuertemente a una matanza excesiva: «si no fuese por los *tancats* artificiales, los patos de la Albufera se reducirían a una tercera parte» (AEA). La réplica de los cazadores es crispada: «No saben por donde van... los primeros ecologistas son los cazadores, porque nosotros cuidamos de la caza para después tenerla, y ellos hablan mucho, pero hechos pocos» (SCS). Los políticos se ponen diplomáticos: «el furtivismo es anecdótico» (CMA); «ellos son conscientes de que no pueden matarlo todo... los cazadores son personas relativamente consideradas» (CA).

La opinión mayoritaria tiende a coincidir con el ecologismo (tabla 2). Decía Veblen (1992 (1899):26) que las armas son honorables, y que «su uso, incluso si es sólo para perseguir a las criaturas más miserables de los campos, se convierte en una ocupación honorífica». En la moderna sociedad urbana, la caza ha perdido totalmente la relativa organicidad que conserva en muchas sociedades rurales y es sólo un ambi-

to de relaciones sociales para algunos miembros de las clases altas o, como mucho, un deporte en las formas accesibles a un público más amplio. El elemento de distinción se ha disociado casi completamente. Quizás esto explica su escasa popularidad. Los valencianos urbanos ven la caza en la Albufera como cosa de ricos y poderosos. No es que en los pueblos del sur del lago sea la caza estrictamente popular. En la subasta de los puestos de tiro se pagan precios muy altos, que no están al alcance de todos. Pero, por decirlo así, su imbricación social es más densa. El dinero recogido contribuye a financiar algunos equipamientos agrícolas colectivos y la persecución del *pardal* conecta con la forma de vida de los propietarios arroceros, relativamente prósperos. No son todo el mundo pero, en una tierra donde no abundan los terratenientes, tampoco son un grupo estrictamente elitista.

La relación entre el arrozal y el lago también tiene que ver con un contencioso que mantienen los cazadores, los ecologistas y la Administración, a propósito del calendario de caza. Los primeros días de octubre, ya segado el arroz, se quema la paja, y entonces los patos se van al lago. Antes se cazaba en septiembre, aprovechando las semanas anteriores a la siega. Una nueva regulación estatal ha atrasado el inicio de la temporada hasta el 15 de octubre. En 1991, la ley se violó con la complicidad de la Conselleria de Agricultura, pero el traspaso de las competencias a Medio Ambiente ha implicado algo más de seriedad en la aplicación de las normativas. Los cazadores siguen reclamando más tiradas y el mantenimiento de las cábilas, una práctica tradicional, muy criticada por los ambientalistas, que describen así: «La semana siguiente a cuando acaban las tiradas, nos vamos en cuadrillas toda la semana y nos quedamos en medio de la partida, ésa es la costumbre de este pueblo... y no vengo a casa en toda la semana; todos somos hombres, ninguna mujer, como mucho el último día, para quedar bien con las mujeres, las convidamos y vienen a pasar el día con nosotros» (SCS).

Los tira y aflojas han convencido a algunos cazadores de la necesidad de negociar. Los grupos más extremistas han fundado una nueva asociación (AVADECA, Asociación Valenciana en Defensa del Cazador), que mantiene una postura disidente respecto a la Federación de Caza, a la que consideran demasiado complaciente. Esta asociación pidió en 1994 que las compe-

tencias volvieran a Agricultura, el mantenimiento de las cábilas y la desaparición de toda restricción específica basada en las condiciones del parque natural.

(Hay, por otra parte, un conflicto latente entre la caza y la expansión industrial. Es ésta la que más ha trastornado la vida silvestre y reducido las poblaciones de aves. Los cazadores lo saben: «Allí no tienen alimento porque la Albufera está hecha una mierda... nos dicen que la caza es la que mata y allá hay vertidos que hacen más mal que las escopetas» (SCS). La condición subalterna del mundo agrario en la sociedad contemporánea queda manifiesta en el hecho de que este argumento no se usa en defensa de un mayor esfuerzo para limpiar el lago, sino sólo como defensa frente a las críticas ambientalistas.)

4.2. Comunidades de pescadores

Según las organizaciones conservacionistas, los gobiernos deben ayudar a las comunidades de pescadores artesanales: mediante el reconocimiento de los derechos tradicionales, la concesión de acceso exclusivo o prioritario a la pesca, la restauración o establecimiento de instituciones de gestión comunitaria, la delegación de la gestión en la comunidad, el fomento de la participación de los afectados y la protección de los ecosistemas de los que depende la pesca. En resumen: «Se ha de permitir que las comunidades artesanales de pescadores pesquen sosteniblemente en áreas debidamente protegidas» (IUCN-UNEP-WWF, 1991:146).

Las tres cofradías de pescadores (El Palmar, Catarroja y Silla) que hay en el ámbito del parque responden casi a la perfección a esta descripción. Los derechos tradicionales están reconocidos y autorregulan su actividad de forma comunitaria. No es casual, pues, que los pescadores sean, de todos los grupos que tienen intereses económicos en la zona, el más favorable al parque. De todas formas, la pesca en el lago es una actividad más bien marginal. Quedan unas decenas de *redolins* para la pesca de la anguila y unos pocos cientos de pescadores. Todos, por otra parte, a tiempo parcial. Es decir, no viven del lago, o lo hacen indirectamente, a través de servicios que aprovechan su atractivo paisajístico. No viven de los rendimientos monetarios de la pesca, que es sólo una fuente complementaria

de ingresos. Como consecuencia, su apoyo a las medidas conservacionistas es tan auténtico como poco apasionado.

4.3. Arrozal y sostenibilidad

Su continuada marginalización en la sociedad industrial impone a la agricultura una «modernización forzosa» que tiende a hacerla también insostenible. En este sentido, la muy reiterada tesis según la cual el arrozal es la síntesis entre las necesidades ecológicas y el uso productivo no debería llevar a olvidar el hecho de que ésta es una síntesis precaria. El delicado equilibrio al que parece haber llegado la titánica lucha histórica de los campesinos con el lago podría ser, sobre todo, el resultado provisional del agotamiento de las fuerzas de los contendientes. El futuro del parque depende, en efecto, de que se consiga o no consolidar en él una agricultura económicamente viable y ambientalmente poco agresiva. Es decir, depende de la continuidad del arrozal y de su evolución hacia procesos menos intensivos en insumos químicos. De hecho, nadie imagina un retorno del marjal al estado silvestre. Casi todo el mundo acepta este criterio: «La eliminación del arrozal perjudicaría al ecosistema actual, que es muy artificial» (CA). Los campesinos se encargan de recordarlo: «Natural, natural, ni conviene, porque cuando lo era buscaron a los labradores para que lo sanearan; y cuando lo han limpiado, entonces, pues qué bien quedaría pintado de verde...» (AVA). La necesidad de buscar un equilibrio no depende sólo, por otra parte, de cómo se evalúe la simbiosis entre el lago y el arroz; es también una cuestión de fuerza: «la influencia mayor dentro del parque son los campesinos; si la Administración no pone los medios necesarios para contentarlos, harán fracasar el parque» (ULR).

Aunque en la primera mitad de los 90 ha podido detectarse una cierta tendencia a la negociación y a la flexibilización de las posiciones, la búsqueda del equilibrio es compleja. El mundo de los campesinos es ambivalente. Combina las críticas al parque con la reivindicación del carácter complementario de la agricultura y el lago. Ven a la Albufera a la vez como espacio a conquistar y como ámbito consustancial a su propia vida. Esa doble mirada está desgarrada: «La gente quiere a su campo y

está muy apegada y hará lo que sea por su campo, incluso perder dinero, pero eso dura un año, o dos, o tres, y se acaba» (AVA).

Las técnicas «modernas», que han evitado que la marginalidad llegue tan lejos como lo ha hecho en la pesca, agravan las tensiones de insostenibilidad. El conflicto entre conservación y agricultura se ha hecho crónico en cuatro puntos: el uso de herbicidas, pesticidas y abonos; los derechos del propietario de la tierra; la disposición de los residuos y la protección de los animales (Hannigan, 1992; Hamilton, 1985; Buttel et al., 1981). El monocultivo del arroz en el contexto de la agro-industria tiende a potenciar esas tensiones. En sentido contrario comienza a actuar una visión agroecológica (Sevilla y González, 1990), orientada a la sostenibilidad y a la recuperación de la autonomía del mundo campesino. De hecho, aunque es minoritario, existe un grupo de agricultores alternativos (vid. Beus y Dunlap, 1991), conscientes de la ecología de la agricultura, que creen que con el parque «todos podemos ganar mucho en lo que respecta a vivir en un lugar a gusto y limpio» (ULR). La consolidación de esta orientación alternativa depende, entre otras cosas, de que las formas relativamente más sostenibles de producción agraria ensanchen su presencia en los mercados. En la Albufera está presente la idea de que el cultivo biológico puede ser el futuro para el arroz. Una idea que quizás no sea inviable, a juzgar por las respuestas de los posibles consumidores cuando se les pregunta por el tema (tabla 3).

Las cosas son hoy demasiado confusas y deben quedar abiertas. No obstante, sí puede indicarse que la orientación que tomen no va a depender de ninguna supuesta característica que haga diferente la visión sobre el medio ambiente de los campesinos de la mantenida por el resto de la población. Quienes sostienen que los campesinos son especialmente resistentes a las ideas ecologistas suelen alegar que hacen un uso directo del medio y tienden a ver la preocupación de las gentes de ciudad como puramente estética o recreativa. Apuntan también que su renta es más baja y que eso les lleva a valorar más el crecimiento. Quienes mantienen el punto de vista contrario aducen que los campesinos perciben la adaptabilidad y flexibilidad de la naturaleza, y que ven su trabajo con ella bajo un prisma de colaboración, no de enfrentamiento. Y añaden que las tradiciones agrícolas, más sos-

tenibles, tienen aún mucha presencia. Seguramente hay elementos de verdad en todo eso. Todas son piezas de la ideología campesina que adquieren un peso relativo diferente según los contextos.

4.4. El uso social del Saler

Aunque, en los 70, la defensa de la propiedad pública de la Devesa —a fin de mantener su uso recreativo— estuvo unida al proyecto de conservación y lo reforzó, hay en este punto un conflicto potencial, derivado del simple hecho de que son 800 Ha. para más de 1 millón de personas: el problema es «cómo compatibilizar el uso y la protección» (PSOE). Hay un amplio soporte a la continuidad de la afluencia masiva al bosque y las playas. De hecho, éste es el único aspecto del programa ecologista que no ha ganado el consenso de la población (tabla 2). Hoy por hoy, sin embargo, acceso masivo es casi sinónimo de acceso en coche. Y aquí las cosas cambian: la decisión de no ampliar las carreteras en el parque está bien vista (tabla 2). (Pese a que hay excepciones. Es curioso, por ejemplo, el argumento pseudoecologista empleado por un político para defender más carreteras entre Valencia y El Perelló: «es que la emanación de dióxido de carbono que lanzan los coches cuando están tres horas atascados allí es una barbaridad» (UV)).

Las contradicciones apuntadas se condensan hasta la más literal perplejidad en un grupo de usuarios permanentes del parque, los residentes con ocupaciones urbanas. Gentes que trabajan en la ciudad pero viven en El Saler y mantienen la visión de la naturaleza propia de la moderna legión de suburbanitas. Mezclan una visión esteticista y consumista del parque, interesada en aprovechar la ventaja posicional de vivir en medio del bosque, con toda la parafernalia de la vida ciudadana. Aspiran por una parte a mejores accesos para sus coches: «Cuando remodelaron la pinada, cuando hicieron las fincas, hicieron unas carreteras superpreciosas... entró la otra legislación y rompieron las carreteras... y los domingos hay atascos, que podrían resolverse, ensanchando la carretera de Alfafar y en el cruce, si vas por la autopista, pues hacemos unos escalextrics...» (AVS). Y quieren, por otra parte, que el resto de la gente no use esos accesos, que se restrinja la entrada: «Ahí se mete un

millón de personas cada domingo, todos a coger espárragos y a dejar porquería, eso no es bueno» (AVS). Protestan porque la ampliación del puerto provoca la pérdida de arena en las playas a la vez que reclaman un puerto deportivo en su urbanización. Piden luces potentes en la pinada y menos luces en la zona deportiva. Las tensiones del uso social del Saler se concentran en estos asfálticos desconcertados, que fueron a realizar el sueño absurdo de una «urbanización en medio de la naturaleza» al sitio más conflictivo: «El Ayuntamiento está abandonando el Saler como zona de veraneo, no quiere o no puede; aquí somos ya más que nada una ciudad dormitorio, y nos hemos encontrado con la capital a un lado y, al otro lado, con un parque natural que no sabemos lo que es...» (AVS).

5. La sociología del conflicto de valores

En *cluster analysis*, aplicado a los datos de la encuesta, ha determinado las siguientes configuraciones de opinión⁵. (1) Desarrollistas o industrialistas (en torno al 16%), poco entusiastas de la conservación de la naturaleza y poco preocupados por la marginación de la agricultura, prefieren construir carreteras a descontaminar y no comprarían productos verdes. (2) Agraristas (alrededor del 19%), partidarios de las subvenciones al arroz y también del uso intensivo de productos químicos, de las desecaciones y de la caza, pero vacilantes en dar prioridad a las carreteras. (3) Consumistas modernos (22%), favorables a la visita masiva al parque y exigentes a la vez de que éste esté limpio y bien cuidado. (4) Conservacionistas moderados (23%), que han hecho suyas las opiniones ambientalistas pero muestran poca disposición a hacer sacrificios y poco sentimiento de que las medidas son urgentes. Y (5) Ecologistas (en torno al 20%), que suscriben todas las opiniones recogidas en la columna de la izquierda de la tabla 2.

Esta articulación de preferencias y valores no es muy distinta a la descrita por otros estudios hechos en otras partes del mundo, que han identificado minorías significativas (en torno al 20%) en posiciones contrapuestas, claramente ecologistas o productivistas, y diversas

Tabla 4
Opinión favorable a la conservación de la Albufera, por edad, sexo y nivel educativo
 Declaran estar muy de acuerdo o más bien de acuerdo con la proposición correspondiente
 (Población de 18 y más años de Valencia y su área metropolitana, %, 1993)

	Por edad			Por sexo		Por nivel educativo			
	18-35 años	36-65 años	65 y más años	Varón	Mujer	Sin estudios	Primarios	Secundarios	Superiores
La inversión en carreteras y autovías debería reducirse para dedicar más dinero a descontaminar la Albufera	56,9	47,4	51,2	49,9	52,9	59,5	47,1	56,2	51,6
El uso de abonos químicos, herbicidas y pesticidas debería limitarse en la Albufera, aunque disminuyera la rentabilidad de los cultivos	72,9	73,4	70,8	72,2	73,4	73,0	71,2	73,4	76,5
La desecación de terrenos para sustituir el arroz por otros cultivos más rentables no debe permitirse en la Albufera porque es dañina para la naturaleza	61,0	61,6	62,2	61,0	61,9	64,9	58,1	64,1	64,9
La caza es perjudicial para las aves de la Albufera y debe ser limitada severamente	73,9	60,8	45,7	63,7	62,8	33,8	58,9	73,9	74,2
Las empresas que vierten a la Albufera deben pagar el tratamiento de los residuos que producen a fin de no contaminar el lago	85,4	89,7	87,4	87,6	88,0	83,8	88,2	87,1	89,8
La costa desde el Saler hasta Cullera es una parte importante del parque natural y no deberían permitirse en ella nuevas construcciones	76,3	70,4	57,4	74,6	66,8	50,0	87,1	76,5	87,5
El Saler es parte de un parque natural y debe ser protegido restringiendo el acceso de la gente	25,7	22,4	27,5	24,7	24,2	21,7	22,3	26,6	28,9
La circulación de coches y motos es perjudicial en un parque natural, y por eso no deben ampliarse las carreteras en el área de la Albufera, ni deben construirse otras nuevas	62,0	57,0	46,5	60,5	54,1	48,6	52,4	61,9	68,0

posiciones intermedias (Milbrath, 1984:54-61; Olsen, Lodwick y Dunlap, 1992:169-170; Peixoto, 1993:62-63; Ester, Nelissen & Seuren, 1994).

Por otra parte, estas configuraciones de la opinión no son reductibles a las estructuras tradicionales de conflicto político o socio-económico. El análisis ha mostrado que la gente más joven, con más estudios, de clase media, con ocupación estable y catalanoparlante se declara ligeramente más proclive a conservar los valores naturales del parque; en cambio, la ideología política (en términos de derecha e izquierda), el sexo, el grado de nacionalismo y el hecho de vivir en la ciudad o en los pueblos no son significativos. Sin embargo, el resultado más a destacar es que los factores significativos lo son muy poco, que las diferencias entre los grupos son muy pequeñas (tablas 4 y 5). Una conclusión que coincide con otros

muchos estudios (Milbrath, 1984; Buttel & Flinn, 1978; Buttel et al., 1981; Olsen, Lodwick & Dunlap, 1992:68-75; Ester, Nelissen & Seuren, 1994). Según contextos geográficos y según variaciones atribuibles en buena medida a cuestiones metodológicas, algunas variables aparecen con una cierta relación con posiciones favorables al ambientalismo, pero sin que se defina una estructura claramente delimitada. Parece que la búsqueda de articulaciones culturales, de líneas de fractura o de conflictos de valores relativos a problemas ecológicos debería buscarse, probablemente con técnicas más cualitativas, por caminos diferentes a los indicados por las variables más usuales en la sociología.

La extendida creencia según la cual la conciencia ambiental aumenta a medida que lo hace la instrucción escolar consumida no encuentra una confirmación rotunda en el caso de la

Tabla 5

Opinión favorable a la conservación de la Albufera, por opinión política y adscripción subjetiva de clase

Declaran estar muy de acuerdo o más bien de acuerdo con la proposición correspondiente
(Población de 18 y más años de Valencia y su área metropolitana, %, 1993)

	Opinión política			Clase	
	Izquierda	Centro	Derecha	Media	Trabajadora
La inversión en carreteras y autovías debería reducirse para dedicar más dinero a descontaminar la Albufera	54,2	47,0	56,6	52,9	51,7
El uso de abonos químicos, herbicidas y pesticidas debería limitarse en la Albufera, aunque disminuyera la rentabilidad de los cultivos	74,6	71,8	69,8	71,8	73,5
La desecación de terrenos para sustituir el arroz por otros cultivos más rentables no debe permitirse en la Albufera porque es dañina para la naturaleza	60,7	61,1	65,0	62,1	60,6
La caza es perjudicial para las aves de la Albufera y debe ser limitada severamente	66,6	62,0	56,6	73,6	56,2
Las empresas que vierten a la Albufera deben pagar el tratamiento de los residuos que producen a fin de no contaminar el lago	89,0	88,4	89,6	86,6	88,4
La costa desde el Saler hasta Cullera es una parte importante del parque natural y no deberían permitirse en ella nuevas construcciones	70,1	69,9	72,6	79,1	64,4
El Saler es parte de un parque natural y debe ser protegido restringiendo el acceso de la gente	23,4	26,6	29,2	23,3	24,3
La circulación de coches y motos es perjudicial en un parque natural, y por eso no deben ampliarse las carreteras en el área de la Albufera, ni deben construirse otras nuevas	62,2	50,8	55,6	57,6	56,8

Albufera (tabla 4). Asimismo, el tópico que vincula ecologismo y juventud no se manifiesta con mucha claridad. Aunque la edad resulta significativa, no parece haber ninguna determinación generacional en la percepción de la problemática del parque natural. En cuanto al sexo, sólo cabe reseñar una disposición más favorable de las mujeres al consumo de alimentos orgánicos. Aunque los planteamientos basados en una perspectiva de género están incorporando elementos muy significativos a la cultura ecologista —el debate sobre el ecofeminismo lo ilustra sobradamente— esta variable no es significativa por lo que respecta a las opiniones aquí analizadas.

En cuanto a los problemas de la Albufera no hay diferencias reseñables entre las gentes de derechas y las de izquierdas (tabla 5). En cambio, la autopercepción como miembro de la clase media o de la clase trabajadora ha aparecido en el análisis ligada a diferencias significativas en tres puntos: la gente que se considera de clase media se declara más contraria a la caza y a la urbanización del litoral, así como más predispuesta a pagar más en el recibo del agua si ello contribuye a sanear la Albufera. La interpretación de estos datos no es simple. Aunque la consideración del ecologismo como fenómeno de clases medias se difundió bastante en los setenta y se prolonga en la actualidad en las teorizaciones sobre la expansión de valores «postmaterialistas», los primeros estudios que cuestionaron esta visión son ya antiguos (Buttel & Flinn, 1978) y, desde entonces, se han multiplicado y han acumulado evidencia. Es bastante plausible la tesis de que los matices diferenciales que aparecen a veces en las encuestas sean sobre todo un subproducto de la propia técnica de investigación. No es muy extraño, después de todo, que las declaraciones de quienes no han de hacer cuentas para llegar a fin de mes sean levemente más generosas. Esta sospecha se acentúa cuando se considera que el análisis por situación ocupacional revela una cierta erosión del compromiso ambientalista en los sectores laboralmente más precarizados. En el caso de la Albufera, las dos conclusiones que podrían enunciarse con más rotundidad, si acaso, serían las siguientes: que el ambientalismo es una ideología interclasista y que la flexibilización del mercado laboral reduce la disposición social en favor de prácticas ecológicamente responsables.

NOTAS

* En realidad, sabemos más cosas del plancton, de los artrópodos y de las palmípedas del lago que de los hombres y mujeres que han vivido y viven allí.

¹ L'Albufera se formó al quedar cerrada, debido a la formación de la barra arenosa de la Dehesa del Saler, una porción de mar que, poco a poco, fue transformándose en agua dulce. Se ha calculado que la formación de la restinga se produjo hace seis mil años. Originalmente, el lago se extendía probablemente sobre unas treinta mil hectáreas, entre la desembocadura del Júcar y la del Turia. En el siglo XVIII su superficie era de catorce mil hectáreas; a fines del XIX quedaban cinco mil y tres mil en 1927, cuando la propiedad pasó a la ciudad de Valencia. Esta acelerada reducción se explica en buena parte por la actividad humana (Gómez López, Pardo y Uríos, 1988:255). La actual zona de cultivos de naranja y huerta del litoral entre Sueca y Valencia constituye, más o menos, la antigua periferia del lago, mientras que los arrozales actuales son asimilables, a grandes trazos, con la antigua zona inundada. La relativa facilidad para transformar en arrozal la zona de marjal ha llevado históricamente a las gentes de la Horta y de la Ribera a un trabajo de aterramiento que ha llevado a la situación actual (Sanmartín Arce, 1982).

Las riberas de la Albufera tienen una vegetación palustre de gran interés (Carretero i Boira, 1989). En cuanto a la fauna (Docavo Alberti, 1979), aunque casi la totalidad de los grupos zoológicos han sufrido intensas reducciones, que han llevado incluso a la desaparición -víctimas de la contaminación- de no pocas especies (es el caso de la mayoría de las especies de moluscos y de crustáceos decápodos autóctonos), la Albufera conserva formas de vida silvestre, especialmente la ornitofauna, que le dan un valor relevante en el contexto de las zonas húmedas europeas.

En las últimas décadas, los valores naturales del parque están amenazados por: vertidos urbanos e industriales que llegan al lago frecuentemente sin depurar e incluyen materia orgánica, metales pesados, detergentes, fosfatos, nitratos, etc.; urbanización del litoral para usos turísticos y de segunda residencia que ha comportado la destrucción de dunas, malladas y bosques en el sistema litoral; aterramientos para convertir el arrozal en huerta o naranjales; vertidos de origen agrícola (herbicidas, pesticidas, etc.); caza abusiva que ocasiona mortandad de ejemplares de especies protegidas; carreteras y otras infraestructuras que permiten un tráfico rodado intenso que perturba la nidificación de las aves, separan entre sí los subsistemas del parque, acentúan la degradación de las playas o facilitan una presencia humana excesiva.

² Este artículo está basado en las conclusiones de Cabrejas, M. y E. García (con R. García Ródenas): *València, l'Albufera, l'Horta: Medi ambient i conflicte social. Memòria del projecte d'investigació «Ciutat, camp, natura: medi ambient i conflictes socials a l'àrea metropolitana de València»*, no publicado. La investigación fue realizada entre 1991 y 1995, gracias a una subvención de la I.V.E.I. (Institució Valenciana d'Estudis i Investigació).

³ Se realizaron entrevistas abiertas en profundidad a representantes de alto nivel de las diferentes instituciones y organizaciones sociales implicadas en el debate sobre el parque natural de la Albufera, entre el invierno de 1991 y el verano de 1992 (se indica entre paréntesis una abreviatura para las que son citadas en el texto):

Acció Ecologista-Agró (AEA)
 Asociación de Vecinos del Saler (AVS)
 Asociación Valenciana de Agricultores (AVA)
 Ayuntamiento de Cullera (AC)
 Cofradía de Pescadores del Palmar (CPP)
 Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana (CA)
 Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana (CMA)
 Consejo Metropolitano de l'Horta (CMH)
 Dirección General de Industria, Generalitat Valenciana (DGI)
 Dirección General de Obras Públicas, Generalitat Valenciana (DGOP)
 Grupo municipal de EUPV (Izquierda Unida), Ayuntamiento de Valencia (IU)
 Grupo municipal del PP, Ayuntamiento de Valencia (PP)
 Grupo municipal del PSPV-PSOE, Ayuntamiento de Valencia (PSOE)
 Grupo municipal de Unión Valenciana, Ayuntamiento de Valencia (UV)
 Sociedad de Cazadores de Sueca (SCS)
 Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià (ULR)

⁴ La encuesta, con una muestra de 810 entrevistas representativa de la población mayor de edad de las comarcas de l'Horta (incluyendo Valencia) y la Ribera Baja, se realizó en noviembre de 1993.

⁵ Esta parte del estudio se debe al trabajo de Ricardo García Ródenas, cuya contribución agradecemos muy sinceramente.

BIBLIOGRAFÍA

- AEORMA (1975): *El Saler: Dades per a una decisió col·lectiva*. València, Cosmos.
- AGÈNCIA DEL MEDI AMBIENT (1989): *Resumen de alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial del Plan Especial del Parque Natural de la Albufera*. València, Generalitat Valenciana-AMA, policopiado.
- ALMENAR ASENSIO, R. (dir.) (1991): *Atlas de la gestión del medio ambiente en la Comunidad Valenciana*. Valencia, Generalitat Valenciana-Conselleria del Medi Ambient.
- ALTVATER, E. (1994): *El precio del bienestar. Expolio del medio ambiente y nuevo (des)orden mundial*. Valencia, Alfons el Magnànim.
- BECK, U. (1995): *Ecological politics in an age of risk*. Cambridge, Polity Press.
- BEUS, C.E., y DUNLAP, R.E. (1991): «Measuring adherence to alternative vs. conventional agricultural paradigms: a proposed scale». *Rural Sociology*, vol. 56, n° 3, pp. 432-460.
- BURRIEL DE ORUETA, E. (1971): *La huerta de Valencia. Zona sur. Estudio de geografía agraria*. Valencia, Alfons el Magnànim.
- BUTTEL, F.H. y FLINN, W.L. (1978): «Social class and mass environmental beliefs: a reconsideration». *Environment and Behavior*, vol. 10, n° 3, pp. 433-450.
- BUTTEL, F.H.; Gillespie, G.W.; Larson, O.W. y Harris, C.K. (1981): «The social bases of agrarian environmentalism: a comparative analysis of New York and Michigan farm operators». *Rural Sociology*, vol. 46, n° 3, pp. 391-410.
- CARRETERO, J.L. y BOIRA, H. (1989): *Flora y vegetación de la Albufera de Valencia. Bases para su recuperación*. Valencia, Alfons el Magnànim.
- CASTELLÓ, J.V. (1991): *Pescadors, caçadors i ramaders. Un estudi de les economies complementàries a l'Horta-Albufera (1761-1846)*. Catarroja, Servei de Publicacions de l'Ajuntament de Catarroja.
- CAVANILLES, A.J. (1984): *Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia*. Madrid, Imprenta Real, 1795. Ed. facsímil, 2 vols., Valencia, Albatros.
- CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT (1994): *Estudio para la ordenación de los recursos naturales de la zona de la cuenca hidrográfica de l'Albufera, vol. VI*. València, Generalitat Valenciana, policopiado.
- CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORT (1992): *El transporte metropolitano en el área de Valencia. Encuesta de movilidad metropolitana, 1991*. Valencia, Generalitat Valenciana.
- COSTANZA, R.; FARBER, S.C. y MAXWELL, J. (1989): «The valuation and management of wetland ecosystems». *Ecological Economics*, vol. 1, pp. 335-361.
- DD.AA. (1984): *La Mediterrània: La nostra mar*. València, Generalitat Valenciana, Conselleria de la Presidència.
- DE GROOT, R.S. (1992): *Functions of nature. Evaluation of nature in environmental planning, management and decision making*. Wolters-Noordhoff.
- DOCAVO ALBERTI, I. (1979): *La Albufera de Valencia. Sus peces y sus aves (ictiofauna y avifauna)*. Valencia, Alfons el Magnànim.
- DUNLAP, R.E. (1992): «Trends in public opinion toward environmental issues: 1965-1990». Dunlap, R.E. y Mertig, A. (eds.): *American environmentalism: The U.S. environmental movement, 1970-1990*. Filadelfia, Taylor & Francis, pp. 89-116.
- DUNLAP, R.E. y VAN LIERE, K.D. (1984): «Commitment to the dominant social paradigm and concern for environmental quality». *Social Science Quarterly*, vol. 65, n° 4, pp. 1013-1029.
- DURNING, A.T. (1992): *How much is enough? The consumer society and the future of the Earth*. Londres, Earthscan.
- ESTER, P.; HALMAN, L. y SEUREN, B. (1993): «Environmental values in Europe and North-America: A cross-national comparison». Trabajo presentado en la Conferencia Social Functions of Nature/Les Fonctions Sociales de la Nature, SORISTEC/CNRS-ISA, Chantilly, 8-12 marzo.
- ESTER, P.; NELISSEN, N. y SEUREN, B. (1994): «Is the 'wave' in the Netherlands green?: Developments in environmental concern in the Netherlands between 1985 and 1990». Trabajo presentado en el XIII World Congress of Sociology, Bielefeld, julio, 18-23.
- FOLCH I GULLÉN, R. (ed.) (1988): *Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la gestió de la natura als Països Catalans*. Barcelona, Barcino.
- FOWLER, E.P. (1991): «Land use in the ecologically sensible city». *Alternatives*, vol. 18, n° 1, pp. 26-36.
- FREUDENBURG, W.R. (1991): «Rural-urban differences in environmental concern: a closer look». *Sociological Inquiry*, vol. 61, n° 2, pp. 167-198.
- FUKS, M. (1994): «Theoretical and practical considerations on environment-related litigation». *International Sociology*, vol. 9, n° 4, pp. 447-463.

- FUSTER, J. (1993): *L'Albufera de València*. Alzira, Bromera.
- GADGIL, M. y GUHA, R. (1995): *Ecology and equity: The use and abuse of nature in contemporary India*. Londres, Routledge.
- GARCÍA MONERRIS, C. (1985): *Rey y señor. Estudio de un realengo en el País Valenciano. La Albufera (1761-1836)*. València, Ajuntament de València.
- GAVIRIA, M. (1974): *Ni desarrollo regional ni ordenación del territorio: el caso valenciano*. Madrid, Turner.
- GIRARDET, H. (1992): *The Gaia atlas of cities: New directions for sustainable urban living*. Londres, Gaia Books.
- GIRI, J. et alii (1991): *Industrie et environnement en Méditerranée: Évolution et perspectives*. Paris, Economica.
- GÓMEZ LÓPEZ, J.A.; PARDO, R. y URÍOS, V. (1988): «Humedales». DD.AA.: *Guía de la naturaleza de la Comunidad Valenciana*. Valencia, Alfons el Magnànim. pp. 249-265.
- GRENON, M. y BATISSE, M. (dir.) (1990): *El Plan Azul: El futuro de la cuenca mediterránea*. Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
- HAMILTON, P. (1985): «Small farmers and food production in Western Europe». *International Social Science Journal*, vol. 37, pp. 345-360.
- HANE, K. y KOPPEN, I. (1994): *Alternative decision-making techniques for conflict resolution: Environmental mediation in the Netherlands*. Berlin, Schriften zu Mediationsverfahren im Umweltschutz n° 5, WZB working paper, 28 pp.
- HANNIGAN, J.A. (1992): «Environmentalism and agriculture: movement and countermovement». Trabajo presentado en la Conferencia Current Developments in Environmental Sociology, I.S.A., Woudschoten (The Netherlands), 17-21 junio.
- HOUGH, M. (1995): *Cities and natural process*. Londres, Routledge.
- HUNTER, C. y GREEN, H. (1994): *Tourism for the environment*. Londres, Routledge.
- IUCN: UNEP i WWF (1991): *Caring for the Earth: A strategy for sustainable living*. Gland.
- LAFAYE, C. y THÉVENOT, L. (1993): «Une justification écologique? Conflits dans l'aménagement de la nature». *Revue Française de Sociologie*, vol. XXXIV, pp. 495-524.
- LLOBERA SERRA, F. y VALLADARES ROS, F. (1989): *El litoral mediterráneo español. Introducción a la ecología de sus biocenosis terrestres*. 2 vols. Madrid, Penthalon.
- LOWE, G.D.; PINHEY, T.K. y GRIMES, M.D. (1980): «Public support for environmental protection: new evidence from national surveys». *Pacific Sociological Review*, vol. 23, pp. 423-445.
- LOWE, M.D. (1991): *Alternatives to the automobile: Transport for livable cities*. Washington, Worldwatch Institute.
- MILBRATH, L.W. (1984): *Environmentalists: Vanguard for a new society*. Albany, SUNY Press.
- MOMBLANCH I GONZALBEZ, F. de P. (1960): *Historia de la Albufera de Valencia*. València, Ajuntament de València.
- MUMFORD, L. (1964): *La cité à travers l'histoire*. Paris, Seuil.
- MURCH, A.W. (1974): *Environmental concern: Personal attitudes and behavior toward environmental problems*. Nueva York, MSS Information Corporation.
- NEWMAN, P. y KENWORTHY, J. (1989): *Cities and automobile dependence*. Brookfield, Gower.
- OCDE (1993): *Gestion des zones cotières: Politiques intégrées*. París.
- OLMOS I TAMARIT, V.S. (1983): *Els fonaments de l'Horta-Albufera contemporània*. Catarroja, Ajuntament de Catarroja.
- OLSEN, M.E.; LODWICK, D.G. y DUNLAP, R.E. (1992): *Viewing the world ecologically*. Boulder (Co.), Westview Press.
- ORELLANA, M.A. (1972): *Catálogo i descripció dels parcs de l'Albufera*. València, Imp. Camacho, 1795. Ed. facsímil, Sueca, L'Estel.
- PARDO PASCUAL, J.E. (1991): *La erosión antrópica en el litoral valenciano*. Valencia, Generalitat Valenciana.
- PEARCE, D.W. y TURNER, R.K. (1990): *Economics of natural resources and the environment*. Londres, Harvester Wheatsheaf.
- PEIXOTO, O. (1993): *Les français et l'environnement. De Gaïa à Macintosh*. París, les Éditions de l'Environnement.
- PIERA, E. (1988): *El cas de l'Albufera*. València, Generalitat Valenciana-COPUT.
- RAMADE, F. et alii (1990): *Conservation des écosystèmes méditerranéens: Enjeux et perspectives*. Paris, Economica.
- ROMÁN I PÉREZ DE LA LASTRA, X. y QUARTIELLA I BELTRÁN, X. (1989): *Pescadors i llauradors. Activitats econòmiques de les classes populars a l'Albufera (Segle XVII)*. Catarroja, Ajuntament de Catarroja.
- ROSSELLÓ, V.M. (1994): *L'Albufera de València*. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- SÁNCHEZ DÍAZ, J. (dir.) (1991): *Plan especial de protecció del Parque Natural de la Albufera*. València, Generalitat Valenciana-Conselleria de Medi Ambient.
- SANMARTÍN ARCE, R. (1982): *La Albufera y sus hombres. Un estudio de antropología social en Valencia*. Madrid, Akal.
- SCHMITZ, M. (coof.) (1992): *Les conflits verts: La détérioration de l'environnement, source de tensions majeures*. Bruxelles, GRIP.
- SCHNAIBERG, A. (1975): «Social syntheses of the societal-environmental dialectic: The role of distributional impacts». *Social Science Quarterly*, vol. 56, pp. 5-20.
- SCHNAIBERG, A. (1983): «Redistributive goals versus distributive politics: Social equity limits in environmental and appropriate technology movements». *Sociological Inquiry*, vol. 53, n° 2-3, pp. 200-219.
- SEVILLA, E. y GONZÁLEZ, M. (1990): «Ecosociología: Elementos teóricos para el análisis de la coevolución social y ecológica en la agricultura». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 52, pp. 7-46.
- SEVILLA, E. y LÓPEZ, A. (1994): «Agroecología y campesinado: reflexiones teóricas sobre las ciencias agrarias ante la crisis ecológica». Dins DD.AA.: *Agriculturas mediterráneas y mundo campesino: Cambios históricos y retos actuales*. Almería, Instituto de Estudios Almerienses, pp. 67-93.
- SIMMIE, J.; OLSBERG, S. y TUNNELL, C. (1992): «Urban containment and land use planning». *Land Use Policy*, vol. 9, n° 1, pp. 36-46.
- SPURR, P. (1976): *Land and urban development*. Toronto, Lorimer.
- THORNE, C.R.; ABT, S.R.; BARENS, F.B.; MAYNORD, S.T. y PILARCZYK, K.W. (eds.): *River, Coastal and Shoreline Protection*. Nueva York, Wiley, 1995.

- TURNER, B.L.; MOSS, R.H. y SKOLE, D.L. (eds.) (1993): *Relating land use and global land-cover change: A proposal for an IGBP-HDP core project*. Estocolmo, IGBP Report 24-HDP report 5.
- TURNER, R.K. (1988): «Wetland conservation: economics and ethics». Collard, D.; Pearce, D. y Ulph, D. (eds.): *Economics, growth and sustainable environments*. Londres, Macmillan, pp. 121-161.
- TURNER, R.K. (ed.) (1990): *Sustainable environmental management: Principles and practice*. Londres, Belhaven.
- VAN LIERE, K.D. y DUNLAP, R.E. (1981): «Environmental concern: Does it make a difference how it's measured?». *Environment and Behavior*, vol. 13, pp. 651-676.
- VEBLEN, T. (1992): *Teoría de la clase ociosa*. México, Fondo de Cultura Económica.
- WEIDNER, H. (1993): *Mediation as a policy instrument for resolving environmental disputes - with special reference to Germany*. Berlin, Schriften zu Mediationsverfahren im Umweltschutz n° 3. WZB working paper, 37 páginas.
- WHEELER, B.; SHAW, S.; FOJT, W. y ROBERTSON, A.: *Restoration of Temperate Wetlands*. Nueva York, Wiley, 1995.
- ZARAGOZÀ PÉREZ, M. (1982): *El cultiu tradicional de l'arròs a Silla (Albufera de València)*. València, Ajuntament de Silla/Universitat de València.

